

te de la crítica de querer retirar a generales por motivos políticos. Personalmente, en el transcurso de la última semana de agosto y primera de septiembre, tuve ocasión de escuchar en varias oportunidades al presidente Allende reiterar cómo pensaba frente al movimiento militar subversivo que se sentía a punto de estallar. Yo participé en su última reunión de trabajo antes de su masacre, el 10 de septiembre. Estaban presentes en ella otros tres colaboradores del Presidente. En esa oportunidad, el Presidente reiteró que en las Juntas de Calificación Ordinaria que debían tener lugar en las semanas siguientes, de acuerdo con los comandantes en jefe, iba a ejercer definitivamente sus facultades legales para llamar a retiro a los líderes del golpe de Estado. Esto había sido personalmente conversado por el presidente Allende con el comandante en jefe de la Marina, almirante Montero, y con el comandante en jefe del Ejército, general Pinochet».

Y la Marina

El día 31 de agosto, el esquema insurreccional se dibujó todavía con mayor nitidez, cuando el grupo de altos mandos navales dirigidos por José Toribio Merino, obligó al almirante Raúl Montero Cornejo a presentar su dimisión como comandante en jefe de la Armada al presidente Allende.

El hecho ocurrió después que Montero tomara parte en el Consejo Naval Anual de la Armada Nacional, en la mañana del 31 de agosto, para calificar a todos los oficiales ejecutivos de la institución. Al mediodía, en Valparaíso, los altos mandos se reunieron a almorzar. Cuando llegó Montero a sumarse, los almirantes le dijeron que era mejor que se retirara porque iban a deliberar sobre la situación política nacional, y ellos no le tenían confianza. Montero anunció que presentaría su renuncia al presidente Allende, y así lo hizo en la tarde. Dice Joan Garcés:

«Esa tarde, a su regreso a Santiago, comunicó los hechos al presidente Allende y le presentó su renuncia. El doctor Allende se la rechazó y le solicitó que continuara en su cargo, por el bien del país, algunas semanas más mientras lograba desarticular el golpe en la Marina.

»El 11 de septiembre, el almirante Montero fue arrestado por los golpistas y reemplazado en la Comandancia en Jefe por el insurrecto almirante Merino, actual miembro de la Junta Militar.

¿Cuántos otros oficiales fueron arrestados o asesinados por quienes hoy imponen su sangrienta traición en Chile?».

Ese 31 de agosto, también, los organismos civiles al servicio de los generales golpistas habían avanzado un paso más en la conspiración. El Colegio de Abogados, «a petición de diversos colegiados», había preparado un informe «jurídico» sobre si cabía «pedir al Congreso Nacional que declarara la inhabilidad constitucional del Presidente de la República». El Colegio de abogados decía, en ese informe, que sí se podía. Y se hacía la siguiente reflexión, por cuenta de los propios generales:

«Esta acción ilegal e inconstitucional del señor Presidente puede estar determinada por una de dos causas posibles. El Presidente voluntaria y conscientemente, y con propósitos no confesados, se ha propuesto violar sistemáticamente las bases fundamentales de nuestro sistema institucional, o bien el Excelentísimo señor Allende se ve imposibilitado de ajustar su conducta a esas normas que le imponen los deberes inherentes a su cargo».

En ambas alternativas se «justificaba» aparentemente la destrucción de la democracia burguesa chilena por parte del aparato militar de la burguesía, y su reemplazo por un sistema más seguro: el fascismo.

Los últimos días

El diario «El Mercurio» reflejaba ya el 31 de agosto la situación nacional. En su primera página, traía una noticia procedente de Valparaíso que decía así:

«Con la firma del juez naval, vicealmirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Primera Zona Naval, se presentó la petición de desafuero contra el senador socialista, Carlos Altamirano, y del diputado mapucista, Óscar Garretón.

»La petición de desafuero se fundamenta en el respaldo entregado por ambos parlamentarios a los marineros que intentaron apoderarse de dos buques de la Armada para desencadenar una guerra civil».¹⁵

Ya había 20 provincias, de las 25 que tiene Chile, en que los dueños de camiones y colegios profesionales manejados por demócratacristianos y nacionales estaban en huelga.

También en primera página, con ilustración fotográfica del general en retiro en uniforme. «El Mercurio» informaba:

«El próximo martes viajará a Paraguay el general (R) Ro-

berto Viaux Marambio, quien saldrá en libertad a las 24 horas del lunes. Viaux cumplirá en dicho país la pena de extrañamiento a que lo condenó la justicia militar en relación a los procesos acumulados por los sucesos del Regimiento Tacna y los que culminaron con la muerte del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército. El general (R) Viaux debe cumplir una condena de cinco años fuera del país.»

En la segunda página del mismo periódico, había un «estudio» titulado *Impedimentos Constitucionales para el Desempeño Presidencial*, preparado por un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. Al lado, en la sección de «comentarios», uno titulado *La Patria y la Conciencia Militar*, que terminaba con el siguiente párrafo: «En consecuencia, y de modo especial para los militares, obedecer y colaborar con este Gobierno es traicionár a la patria.»

En páginas interiores, una declaración del presidente de la Cámara de la Construcción de Chile, organismo que reunía a los empresarios monopólicos de esa actividad, en la cual se leía:

«El problema de Chile se soluciona con un sentido patriótico que correspondería al señor Allende acoger y que ha sido reiteradamente pedido por toda clase de instituciones y gremios en Chile, y es que se vaya»...

El 2 de septiembre, domingo, el periódico izquierdista «Puro Chile» provocaba una conmoción nacional, al publicar una larga entrevista con el reo José Luis Riquelme Bascuñán, «cargado» con el asesinato de Araya Peters por la Armada y el Servicio de Inteligencia de Carabineros. La entrevista, rompiendo la comunicación del reo, hecha por el director del periódico, Miroslav Popic, demuestra más allá de toda duda que el día del asesinato, Riquelme estaba en su casa, que dos días después fue «cargado» con una confesión falsa, que había sido torturado en los subterráneos del Ministerio de Defensa, con la aprobación del fiscal, Aldo Montagna, y que había capitaneado de la Marina y de Carabineros implicados en un caso de «ocultar a los verdaderos asesinos».

Parte del relato de Riquelme, cuando fue torturado en el subterráneo del Ministerio de Defensa, a fines de julio, decía:

«Imagínese, ahí fueron unas torturas salvajes. Hay una pila de cuestiones que a uno le hacen adentro.

»¿Recuerdas algo?

»Ponían dos sillas, una aquí y otra allá. En una los pies y en la otra las manos. De repente le amarraban los pies con alam-

bres, en los tobillos, entonces estaba usted así afirmado en el aire. Haga cuenta que el medio estaba vacío, colocaba las manos en las sillas y de repente usted quedaba derecho donde le aplicaban la corriente. De repente le colocaban los cables en la cintura, por aquí y «pum». En una me sentaron y me colocaron unos cables de repente ya sentí un golpe fuerte aquí, en la «cuchara» (corazón), como que me iba a ahogar y desde entonces que no me siento bien. Pa' que le digo. Saltaba y me hacían saltar. De repente uno estaba allá cuando luego estaba aquí, al otro lado...»

La denuncia de «Puro Chile» acercaba peligrosamente al conocimiento público el hecho de que el edecán naval de Allende había sido asesinado por sus propios compañeros de armas, en complicidad con la Agencia Central de Inteligencia, a través del Comando de Ex Cadetes.

El 3 de septiembre transcurrió a la espera de «qué ocurriría el cuatro», para la celebración del tercer aniversario de la victoria de Allende en 1970. Tanto para la Unidad Popular como para los partidos de oposición, era un instante de «medir las fuerzas». Para los generales en contacto con el Pentágono, iba a ser un día de ensayo general.

El 4 de septiembre fue, a partir del mediodía, una jornada festiva. A las ocho de la noche había desfilado frente a la Tribuna Presidencial en la Plaza de la Constitución, un contingente de más de 700.000 obreros y campesinos, empleados y estudiantes, niños y mujeres venidos desde toda la provincia y de las provincias fronterizas. Fue una gran demostración de apoyo al Gobierno por parte de sus partidarios, que estaban sufriendo los efectos de un descalabro económico mayúsculo. Pero los gritos no eran sólo de «Viva Allende» «Viva la Unidad Popular». Eran, más que nada, de «Armas para el pueblo», «Hasta cuándo retrocedes Allende», «Sólo el pueblo armado derrotará al momio armado».

Durante todo el día, aviones de la Fuerza Aérea de Chile sobrevolaron la ciudad, especialmente los barrios industriales del sector sur y las calles centrales, para fotografiar las concentraciones de trabajadores dispuestas para el desfile de aniversario. Hubo sobrevuelos sobre La Moneda y en la noche «ejercicios de bombardeo simulados, con rockets, en blancos de tarros de gasolina de 200 litros, en la Base Aérea El Bosque», con aviones Hawker Hunter.

Hubo fiesta en las calles de Santiago hasta la medianoche

pasada. Y hubo reunión de urgencia en la Fuerza Aérea, analizando las fotografías obtenidas durante el día. El cálculo lo decía: unas seiscientas a setecientas mil personas en Santiago y provincias fronterizas, dispuestas a seguir apoyando al Gobierno constitucional. Gustavo Leigh comentó entre sus subalternos que «si el tiempo sigue pasando, estos huevones izquierdistas van a ganar lejos las elecciones del 76». «Ahí sí que tendríamos a los comunistas en nuestro cogote.»

Los opositores civiles también se asustaron y organizaron para el día cinco una enorme manifestación de mujeres, frente a la Universidad Católica de Santiago, para pedir «la renuncia de Allende» y «un Gobierno de militares». Se producen batallas campales en las calles entre adversarios y simpatizantes de la marcha convocada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional.

Las noticias de provincias eran lamentables. Diez y quince atentados dinamiteros por día contra fábricas, sedes políticas de izquierda, domicilios de dirigentes de obreros y campesinos. El transporte terrestre casi totalmente paralizado. Las actividades del servicio estatal de salud, también en paro. Paros parciales de estudiantes, comerciales y profesionales, agrupados en organizaciones manejadas por los partidos de derecha.

El general Pinochet, el 5 de septiembre, había dicho a Allende que «ahora no es igual que octubre», las Fuerzas Armadas «no podemos garantizar nada» porque la Marina, la Fuerza Aérea y algunos de «nuestros generales quieren que usted se vaya... o cumpla con lo que le pide el Congreso». No podía Allende declarar zonas de emergencia bajo control militar, como en 1972.

El 7 de septiembre, Allende acordó rendirse. En la mañana de ese día llamó a su despacho de trabajo al general Augusto Pinochet y a siete generales de la guarnición de Santiago, y les dijo que había decidido anunciar, «el lunes o martes, o tal vez el miércoles con mayor seguridad», su decisión de llamar a plebiscito para dilucidar «el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento» y promulgar totalmente «la reforma constitucional sobre área de propiedad social de la Democracia Cristiana». Los generales recibieron la noticia «con un gesto de asombro» (según la frase que usó Allende para contarle este suceso a Joan Garcés, la noche del lunes 10 de septiembre). Allende les dijo que así «pacificaremos el país», ya que esos son los motivos del conflicto civil actual. «Nadie podrá decir ahora que

el Presidente de la República no respeta a los otros poderes del Estado». Les explicó que, según sus cálculos, la decisión la podría anunciar el martes o miércoles, porque «este fin de semana tengo que dedicarlo a convencer a la Unidad Popular... y eso va a ser duro».

La decisión de Allende tomó de sorpresa a los generales (todos los que asistieron estaban en el complot montado por el Pentágono a partir de noviembre de 1972). Se reunieron en el propio despacho del comandante en jefe en el Ministerio de Defensa, a una cuadra de La Moneda, para llegar a una simple conclusión: Había que derrocar a Allende ANTES de que anunciara su decisión de poner fin al conflicto con la Democracia Cristiana liderada por Eduardo Frei. Se discutió cuántos días se necesitaban para poner en marcha la *blitzkrieg* preparada desde meses antes para arrasar el Gobierno constitucional, la organización obrera, campesina y de empleados, y destruir la democracia burguesa chilena. «Setenta y dos horas», fue la respuesta técnica del general Sergio Arellano Stark, asistente también a la reunión.

Augusto Pinochet fijó la fecha: el martes 11 de septiembre, a partir de la medianoche del día lunes.¹⁶

El 7 de septiembre fue un día realmente agitado. Cerca de las tres de la tarde, en Santiago se recibieron noticias de que la Escuadra Chilena, surta en la bahía de Valparaíso, lista para zarpar a unirse con la flotilla de guerra de Estados Unidos para la Operación Unitas anual, se había sublevado, se negaba a zarpar, hasta que «el almirante Montero sea retirado de las filas y el almirante Merino sea nombrado nuestro comandante en jefe».

El general Augusto Pinochet informó al nuevo ministro de Defensa, Orlando Letelier, que él estaba dispuesto a ir a Valparaíso para hablar con los «insurrectos». Viajó en helicóptero, acompañado de otros cuatro generales del Ejército. En Valparaíso se entrevistó con Merino, le comunicó la gravedad de la situación planteada por la decisión de Allende de quitar la base de sustentación pública al golpe militar, y el acuerdo de la mañana en el Ministerio de Defensa, de dar el golpe el día 11 de septiembre.

Cuando Pinochet volvió a Santiago para informar al Ministro de Defensa que «todo está en calma», «la escuadra zarpará según itinerario previsto el día lunes 10», lo que realmente estaba ocurriendo era que las listas de cerca de veinte mil diri-

gentes medios de organizaciones populares, para ser asesinados por los militares insurrectos a partir de la mañana del golpe, ya estaban saliendo a provincias desde las oficinas de los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Las listas de los dirigentes superiores para ser apresados (unos tres mil), también seguían el mismo camino, y los funcionarios encargados de tener preparadas las proclamas del día de la insurrección ya estaban escribiendo el borrador para ser examinado por Augusto Pinochet, Gustavo Leigh y José Toribio Merino.

Estas listas habían sido «completadas» a través de una petición especial a las misiones militares norteamericanas en Santiago, que las pidieron a la CIA en Washington, para ser entregadas a los generales insurrectos. Eran muy detalladas: nombre, domicilio, edad, profesión, estado civil y amigos personales más cercanos (entre dos y cinco nombres generalmente).

Como una ironía del destino, en la noche del 7 de septiembre, el cuerpo de generales de Carabineros dio una cena a la que invitó a Salvador Allende. A esa cena también asistió el general César Mendoza Durán, quien se portó muy obsequioso con el Presidente. (En verdad, ese día Mendoza todavía no había sido notificado por los generales Pinochet, Leigh y el almirante Merino de que el golpe se haría el martes próximo. El estaba en una conspiración contra Allende y la mayoría de sus propios generales, pero no sabía fecha, ni forma, excepto en lo que concernía al equipo restringido para la preparación del asesinato del propio Allende.) Este hecho, en la mañana del 11 de septiembre, tal vez hizo que Allende se refiriera a Mendoza, en su último discurso transmitido sólo por Radio Magallanes, a las nueve y cuarenta de la mañana, como «ese general rastrero».

El sábado 8, en la mañana, el presidente Allende citó en su despacho al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh; al comandante en jefe de la Marina, almirante Raúl Montero Cornejo; y al comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte. El Presidente les pidió que como una consideración al momento difícil que vivía el país, y a que en la próxima semana iba a hacer el anuncio de su rendición política, «moderaran» la aplicación de la Ley Sobre Control de Armas, para no «exasperar» a los trabajadores. Los comandantes en jefe le dijeron que siempre habían tratado de impedir «excesos» en esos procedimientos, y ahora impartirían instrucciones especiales en ese mismo sentido.

En realidad, el sábado 8 de septiembre fue aburrido para los reporteros. Y mucho más para los reporteros del diario «El Mercurio» que estaban en un departamento del piso decimotercero del Hotel Carrera, con equipo fotográfico provisto de enormes teleobjetivos, desde el día 2 de septiembre. Ese día, la gerencia de «El Mercurio», en conocimiento de que «algo gordo va a pasar en La Moneda uno de estos días», arrendó un departamento por tiempo indefinido allí, y puso de guardia permanente a un equipo de reporteros. No estaba claro para «El Mercurio» si iba a ser el asesinato de Allende o de algunos de los generales, pero impartió instrucciones a sus reporteros de vigilar cada segundo del día la puerta de La Moneda con sus teleobjetivos.

El Juramento

El 9 de septiembre, domingo, desde las once de la noche, la pesada maquinaria militar puesta en marcha para aplastar al pueblo chileno dio otra vuelta en su eje. A esa hora, en casa del general Augusto Pinochet Ugarte, y después de «una comida social», se reunieron el propio Pinochet, el general Gustavo Leigh; el vicealmirante Sergio Huidobro, director de la Escuela de Infantería de Marina (que adiestraba a los grupos fascistas civiles) y el vicealmirante Patricio Carvajal.

La reunión duró desde las once de la noche del día 9 a las dos de la mañana del lunes 10. Fue una reunión, por lo que parece, de «afinamiento» y «comprobación» de la «operación». Según informes posteriores, se supo que en la tarde del 9, los generales Pinochet y Leigh habían hablado con el general Mendoza, de Carabineros, para que montara su aparato para el martes 11. Y los vicealmirantes Huidobro y Carvajal, también en la tarde del mismo día, habían hablado con el almirante Merino para que se las arreglara para arrestar al almirante Montero en la medianoche del día 10.

Según una declaración a la prensa chilena del general Gustavo Leigh, hecha en noviembre de 1973, allí también «se firmó un documento que guardamos en estricto secreto». Probablemente se trata de un documento que detalla los nombres de los conspiradores, para que así ninguno traicionara la insurrección al martes 11.

Pero lo importante es que a las cuatro de la madrugada del